



LA IGLESIA CATÓLICA Y LA PAZ

Por Eduardo Posada Carbó

“Hemos vivido tres años de guerra y no hemos visto que efectivamente se haya avanzado hacia la paz”, expresó el nuevo Presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, Monseñor Luis Augusto Castro, en reciente entrevista a *El Espectador* (14/08/04). Por ello, “se necesita que volvamos otra vez a crear conciencia en el pueblo colombiano de que hay que buscar la posibilidad de que no sea la salida de la guerra”. Según Monseñor Castro, “lo importante es que logremos superar este conflicto armado... por los caminos de la negociación política, por los caminos del diálogo”.

La meta sería, claro está, la paz – que no podría surgir de la guerra, pues con ella se obtendrían quizá “victorias y las victorias son muchas veces enemigas de la paz” -. La paz impuesta, nos dice Monseñor Castro, “no es mucha paz, la paz hay que construirla”, al tiempo que advierte que “la paz tiene unos significados, hay que ponerse de acuerdo en qué entendemos por la paz y cómo la queremos y eso es bueno hacerlo entre todos, no simplemente diseñarlo y buscar imponerla unos a otros. Así no resulta”.

Las palabras de Monseñor Castro acapararon momentáneamente la atención de los titulares de prensa. Sin embargo, hasta ahora sólo excepcionalmente algunos columnistas - como Mauricio Vargas -, han reflexionado sobre los planteamientos de quien hoy preside el Episcopado (*Cambio*, 20/08/05). Por su mensaje mismo – en aparente

contradicción con las políticas gubernamentales -, por la autoridad y enorme ascendencia que la Iglesia Católica sigue ejerciendo sobre la sociedad colombiana, y por el papel que la Iglesia está jugando en la búsqueda de la solución del conflicto, las palabras de Monseñor Castro merecen ser objeto de un amplio debate en la opinión pública.

Algunas precisiones

Quizá la discusión deba comenzar con el cuestionamiento que hizo Mauricio Vargas. Las propuestas de Monseñor Castro estaría basado en “la falsa premisa de que la salida negociada es siempre mejor”.

Pero me parece que no hay una sino varias “falsas premisas” – explícitas e implícitas -, en el razonamiento del Presidente del Episcopado.

Es falso, en primer lugar, sugerir que estamos ante una simple disyuntiva de guerra o negociación. Ni ahora, ni en el pasado. Vargas observa cómo los anteriores procesos de paz que condujeron a la desmovilización de las guerrillas y a su subsiguiente integración en el sistema político obedecieron a ese tipo de “paz impuesta” que Monseñor Castro subvalora. Fueron procesos exitosos cuyas lecciones suelen ignorarse.

Pero contraponer ligeramente la guerra a la negociación es sobre todo una falsa disyuntiva porque ante la hostilidad de los grupos armados ilegales, el Estado tiene la obligación de defender la vida y los otros derechos fundamentales de los ciudadanos, como lo estipula la constitución. No se puede quedar con los brazos cruzados, ni limitarse a proclamar ofertas de diálogo hasta complacer a quienes se mantienen alzados en armas. Por eso el Presidente Uribe tiene algo de razón cuando ha dicho – como lo

hizo durante su campaña -, que el Estado no hace la guerra sino que trata de imponer la ley, el Estado de Derecho.

Quienes hacen la “guerra” son otros. Es por lo menos curioso que en el debate colombiano los “guerreristas” sean casi siempre quienes están del lado de la constitución y las instituciones, y no quienes han decidido combatirlos con violencia. – “¿La Iglesia qué le dice a los apologistas de esta guerra” -, le preguntaron en *El Espectador* a Monseñor Castro. No es claro en la pregunta quiénes, en particular, son esos “apologistas”. Pero por el sentido de la entrevista y las respuestas del prelado, se entiende que los “apologistas de la guerra” son el Gobierno y quienes apoyan sus políticas. En su respuesta a la anterior pregunta, ya Monseñor Castro se había referido a los desarrollos que siguieron tras las frustradas negociaciones con las Farc en la pasada administración: “...se pasó de la orilla de las acciones dialogadas a la orilla de la guerra. La gran mayoría del pueblo colombiano gritó guerra, y creo que todavía sigue siendo la gran mayoría los que piden guerra, para que se acabe con todo este lío”.

Es falso que la gran mayoría del pueblo colombiano haya gritado guerra.

Lo que la gran mayoría demandó en ese entonces, y sigue demandando, es seguridad. Seguridad frente a los homicidios; seguridad frente al secuestro; seguridad frente a las bombas indiscriminadas en los pueblos; seguridad frente a las masacres; seguridad frente a las amenazas cotidianas que obligan a la gente a abandonar sus hogares. No, no es guerra sino anhelos de seguridad, una aspiración básica de cualquier ser humano.

La distinción podrá ser para algunos sutil, pero no por ello deja de ser significativa y central a los importantes planteamientos del presidente del Episcopado. Los pocos análisis que conozco sobre el comportamiento del electorado en el 2002 sugieren – como

lo ha observado un ensayo de Francisco Gutiérrez Sanín -, que en el tema de la paz o la guerra fue donde “más centrismo” se conservó “en todos los estratos sociales”. Más aún, “contra todo lo que se dijo durante la campaña, al parecer fue precisamente en este terreno en donde Uribe no generó una imagen extrema (más bien, de moderación y firmeza combinadas), y por eso le fue bien”.¹ Poco después de iniciado el Gobierno, las encuestas seguían indicando que una mayoría de la población continuaba prefiriendo una solución negociada.

Mi impresión es que esa disposición al diálogo aún existe, pero no puede ser cualquier diálogo, ni cualquier negociación la que deba aceptarse. Lo que me conduce a otra falsa premisa, también implícita en aquella entrevista con Monseñor Castro. Tomadas en su conjunto, sus palabras parecen colocar casi toda la responsabilidad de una salida política negociada en el Gobierno, cuya actual política es duramente criticada como los “pocos efectivos... caminos de la guerra”, mientras se le exigen mayores “signos de paz” para las guerrillas.

Desde el día de su posesión, el Gobierno dejó la puerta abierta para el diálogo, pero con unas condiciones. ¿Es que acaso se le está pidiendo al Gobierno que se vuelva a negociar sin condiciones, bajo fuego, un nuevo modelo social? Quienes de esta manera están colocando casi siempre y en forma predominante la presión para negociar sobre el Gobierno, tendrían que recapacitar sobre los efectos de esa actitud en la falta de disposición de la guerrilla para regresar a la mesa de diálogo en condiciones distintas a las que han querido imponer a nuestra sociedad bajo la amenaza de las armas.

Y hay en el razonamiento de Monseñor Castro – más que otra falsa premisa -, un juicio equívoco o, por lo menos, controvertible. Regresemos a las palabras con que se abrió

este ensayo: “Hemos vivido tres años de guerra”, expresó, “y no hemos visto que efectivamente se haya avanzado hacia la paz”. ¿Se está juzgando aquí la política de seguridad democrática? ¿O la falta de la resolución del conflicto con los grupos armados ilegales? Si lo primero, Monseñor Castro tendría que reconocer, por lo menos, algunos logros: Como señalan en reciente artículo los investigadores Michael Spagat y Jorge Restrepo, un análisis estadístico sobre la evolución de los ataques violentos, combates, muertes y heridos, muestra de “una forma incompleta pero inequívoca que la administración Uribe ha tenido resultados significantes en la lucha contra la guerrilla y en reducir las muertes de civiles”.ⁱⁱ Si lo segundo, el juicio puede ser prematuro, pues es iluso esperar resultados inmediatos en tan corto tiempo a un problema de tan vieja data.

Me temo, sin embargo, que cuando Monseñor Castro afirma que no hemos avanzado efectivamente hacia la “paz”, no tenga en mente ni lo uno ni lo otro.

La paz, según la Iglesia

Y es que, con frecuencia, cuando los prelados de la Iglesia católica hablan de paz no hablan simplemente de ponerle fin a la lucha que los grupos armados ilegales sostienen contra la sociedad y el Estado. “Hay que ponerse de acuerdo en qué entendemos por paz”, observó Monseñor Castro, aunque no nos adelantó su definición de paz. ¿Qué entiende entonces la Iglesia por “paz”?

La pregunta no es retórica. La Iglesia además ha ejercido su liderazgo en la promoción de la llamada “política permanente de paz”, para cuyo fin la Comisión de Conciliación Nacional, convocada por el Episcopado, produjo un interesante documento como “aporte para un debate” sobre el tema. Allí se define la paz en términos maximalistas como “la

instauración de un orden justo y seguro en el que todos los hombres puedan satisfacer a plenitud las necesidades materiales y espirituales que emanan de su dignidad”. Y más adelante se precisa: “una política permanente de paz no se agota en la solución política negociada del conflicto armado”.ⁱⁱⁱ Las implicaciones de tales palabras exigirían un análisis más detallado que el que permiten estas líneas. Baste observar que con ellas se quiere decir que así se acuerde una salida negociada con los grupos armados ilegales no habrá paz en Colombia.

Me parece que los planteamientos de Monseñor Castro deberían ser debatidos en el contexto más amplio de las ideas que ha difundido la Iglesia católica sobre la paz y la reconciliación en Colombia. Hasta donde lo he podido comprobar, el documento de la Comisión de Conciliación Nacional que acabo de citar escasamente fue discutido en la prensa. Como tampoco se someten a debate las regulares declaraciones de los Obispos y otros representantes de la Iglesia.

Considérense, por ejemplo, los sermones de las siete palabras, divulgados por los periódicos en la última época de Semana Santa. En los fragmentos que alcancé a leer - publicados en *El Tiempo*, *El Colombiano* y *El Heraldo* -, lo que me más me sorprendió de ellos fue la acusación general contra casi toda la sociedad como responsable de nuestros males (“Colombia está moralmente enferma”, fue el diagnóstico del Arzobispo de Bucaramanga), y por ende la desculpabilización de los criminales. Se confundían a ratos diversas categorías de crímenes, sin distinguir en sus niveles de horror o daño social, y se confundían además con otros comportamientos que la Iglesia condena por pecaminosos. Sobresalían en esos sermones unos discursos indiscriminados sobre el perdón y la fraternidad, sin mayor sentido sobre la responsabilidad individual y menos

aún sobre la gravedad diferenciada de las violaciones a la ley o a la moral católica. Y a veces, escasa orientación: algunos Obispos se limitaban a lamentar que continuásemos en una “guerra sin explicación”.^{iv}

La Iglesia sigue siendo una de las instituciones más respetadas por la mayoría de los colombianos. Por ello sus planteamientos – sobre todos los de sus jefes -, no pueden ser recibidos con desinterés o indiferencia. Me parece que las palabras de Monseñor Augusto Castro deberían motivar un serio debate sobre cómo ha interpretado la Iglesia la búsqueda de la paz en las últimas décadas. La respuesta podrá ser tan compleja como lo es la institución. Pero eso no puede ser razón para evadir una discusión tan necesaria y urgente para la paz en Colombia.

Referencias bibliográficas

ⁱ Francisco Gutiérrez Sanín, “La radicalización del voto en Colombia”, en Gary Hoskin et al., eds., *Colombia 2002. Elecciones, comportamiento electoral y democracia* (Bogotá, 2003), p. 93.

ⁱⁱ Michael Spagat y Jorge Restrepo, “Colombia’s Tipping Point?” *Survival*, The quarterly journal of the International Institute of Strategic Studies (47)2, 2005.

ⁱⁱⁱ Comisión de Conciliación Nacional, “Hacia la estructuración de una política nacional permanente de paz. Aportes para un debate. Segunda versión” (Bogotá: fotocopia, julio de 1988), pp 10 y 23.

^{iv} Véanse: “Los obispos suplican a los colombianos trabajar por la reconciliación y la paz”, *El Tiempo*, “Colombia se contó en siete palabras”, *El Colombiano*, “Se buscan padres responsables”, *El Heraldo*, marzo 26 de 2005.